



NUE 93-A-2019 (SP)

López y otros contra Dirección General de Centros Penales (DGCP)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con veintiocho minutos del diez de marzo de dos mil veinte.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Jaime Alberto López y Sonia Beatriz Hernández Chacón**, en adelante “los apelantes”, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, relacionada a la información consistente en: *a) copia de los informes de auditorías realizadas en las tiendas de los centros penitenciarios, internas y externas, fechados entre el 1 de enero de 2015 y la fecha actual; b) copia del expediente del proyecto para la creación de un fondo de actividades especiales para las tiendas de los centros penitenciarios; c) copia de los libros diarios de la contabilidad de las tiendas de los centros penitenciarios, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018; y, d) copia del manual o catálogo de cuentas del sistema contable de las tiendas de los centros penitenciarios vigente para los años 2017, 2018 y 2019.*

[Handwritten signatures]

Por su parte, la oficial de información de la **DGCP** resolvió: anexar fotocopia en versión pública de memorando UAIP/OIR-0372/19 y de Oficio UAIP/OIR-0065/19, ambos emitidos por la Unidad de Acceso a la Información Pública y en respuesta a este último oficio se anexa fotocopia en versión pública OF. ASOCAMBIO-0202-2019; estableciéndose en este último que “toda información que se requiera y/o se necesite al respecto de ASOCAMBIO deberá ser solicitada por el interesado directamente a esta organización”.

El instituto admitió la apelación y designó al Comisionado René Eduardo Cárcamo para instruir el procedimiento. Sin embargo, debido a su renuncia efectiva desde el 15 de noviembre de 2019, el caso fue reasignado a la Comisionada en funciones Silvia Cristina Pérez Sánchez. En plena observancia y respeto al derecho de defensa que debe imperar en



todo procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se requirió a la **DGCP** que rindiera el informe de Ley, sin embargo, dicho informe de ley no fue rendido por el ente obligado.

Posteriormente, la audiencia oral se llevó a cabo con la comparecencia de **Sonia Hernández Chacón** y la representación de la **DGCP**, en la cual la parte apelante manifestó que considera que lo requerido es información pública, y dado que en la respuesta no se estableció que dicha información fuera reservada, confidencial o inexistente, sino que simplemente se limitó a decir que se puede solicitar al ente privado; por lo cual, se mantiene en que debe entregarse dicha información y ser de conocimiento público. Por otro lado, la apoderada del ente obligado expuso que debido a la existencia de un proceso de investigación en relación al tema de tiendas institucionales y la asociación ASOCAMBIO, se basa más que todo en que esos documentos no están en poder de la **DGCP**.

En fecha 11 de marzo del presente año, por medio de correo electrónico la apoderada de la **DGCP**, remitió escrito en el cual solicita copia certificada del video de la audiencia oral celebrada el 12 de febrero de 2020, correspondiente al presente caso.

Análisis del caso:

Para resolver la controversia del presente procedimiento se realizará el siguiente análisis: **I.** La competencia de la **DGCP** de poseer la información peticionada; y, **II.** La naturaleza de la información requerida por los solicitantes.

I. En relación a la información solicitada, este Instituto estima pertinente hacer las siguientes consideraciones:

Según la documentación anexada al recurso de apelación, en la copia simple del documento con referencia OF.ASOCAMBIO-0202-2019, se estipula que “toda información que se requiera y/o se necesite al respecto de ASOCAMBIO deberá ser solicitada por el interesado directamente a esta organización”; sin embargo en relación con el requerimiento consistente en: “*copia de los informes de auditorías realizadas en las tiendas de los centros penitenciarios, internas y externas, fechados entre el 1 de enero de 2015 y la fecha actual*”

la DGCP contaba según su estructura organizativa¹ (la cual se encuentra vigente en el organigrama publicado en el portal de transparencia) con un área denominada auditoria interna de TIU, la cual tenía dentro de sus funciones dar seguimiento auditorias administrativas en las diferentes tiendas de los Centros Penitenciarios; lo cual se encuentra respaldado en el Manual de Organizaciones y funciones de noviembre 2016, el cual fue derogado por el manual que entró en vigencia en mayo de 2019. Sin embargo, este Instituto evidencia que la información solicitada comprende desde el año 2015 al mes de abril del 2019, por lo que seguía en vigencia el manual en el cual la DGCP por medio de la unidad administrativa antes mencionada se encargaba de evaluar todos lo relacionado con las tiendas institucionales; siendo por lo tanto el ente generador de la información solicitada.

Asimismo, el art. 154 Reglamento General de la Ley Penitenciaria, establece “para el establecimiento, supervisión y control de la tienda institucional, la Dirección General de Centros Penales deberá contar con un Departamento de auditoría para que periódicamente fiscalice su administración”.

En relación a la información consistente en: *“copia de los libros diarios de la contabilidad de las tiendas de los centros penitenciarios, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018; y copia del manual o catálogo de cuentas del sistema contable de las tiendas de los centros penitenciarios vigente para los años 2017, 2018 y 2019”*; el manual de 2016 otorgaba a la Coordinación de Tiendas Institucionales, el “mantener y actualizar los registros contables del fondo de las tiendas; elaborar y presentar informes financieros de las tiendas institucionales”.

En relación a la información consistente en: *“copia del expediente del proyecto para la creación de un fondo de actividades especiales para las tiendas de los centros penitenciarios”*, el artículo 6 en su letra “d” de la LAIP establece como información pública oficiosa aquella que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa. Así, el artículo 10 de dicho cuerpo normativo establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente; es decir, poner a disposición y a conocimiento de las personas sin que medie

¹ Publicado en http://www.dgcp.gob.sv/?page_id=155, consultado el 24 de febrero de 2020, a las 2:16 p.m



una solicitud para tal efecto. Por otra parte el ordinal 16 del mismo artículo contempla como información de este tipo la relativa a “el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios e incentivos fiscales, así como el número de beneficiarios del programa”; por lo que, lo solicitado se engloba dentro de este apartado.

Por otro lado, dentro del Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Centros Penales, vigente desde noviembre 2016 y derogado, le corresponde a la Unidad de Planificación, Formulación y gestión de Proyectos de la DGCP “elaborar perfiles de proyectos de cooperación con diferentes Instituciones Nacionales e Internacionales que posibiliten satisfacer las necesidades Penitenciarias; brindar seguimiento y presentar informes mensuales al Ministerio de Hacienda sobre el desarrollo de los proyectos, incluyendo aspectos como la etapa y porcentaje de avance que poseen, los desembolsos financieros que se han realizado y las posibles observaciones que puedan tener en caso de atraso en su ejecución”; por lo anterior, se evidencia que dentro de la DGCP existió una unidad encargada de elaborar proyectos y presentarlos a las Instituciones correspondientes. En razón de lo anterior, la información solicitada se encuentra bajo el poder de la DGCP.

En consecuencia, este Instituto no tiene por válido el argumento de la DGCP sobre la inexistencia de la información debido a que fue entregada ASOCAMBIO, pues no acreditó con pruebas, como por ejemplo actas de traspaso de la información. Asimismo, no es creíble que no cuenten con la información, ya que dentro de la **DGCP** existen o existieron unidades que presumiblemente generaron la información, las cuales son: la unidad de auditoría interna de TIU y la coordinación de tiendas institucionales.

II. En las solicitudes realizadas a la **DGCP**, los apelantes requirieron: i) copia de los informes de auditorías realizadas en las tiendas de los centros penitenciarios, internas y externas, fechados entre el 1 de enero de 2015 y la fecha actual; ii) copia del expediente del proyecto para la creación de un fondo de actividades especiales para las tiendas de los centros penitenciarios; iii) copia de los libros diarios de la contabilidad de las tiendas de los centros penitenciarios, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018; y iv) copia del manual o catálogo de cuentas del sistema contable de las tiendas de los centros penitenciarios vigente para los años 2017, 2018 y 2019.

El artículo 6 letra “c” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial.

En relación a lo relacionado con “copia de los informes de auditorías realizadas a las tiendas de los centros penitenciarios, internas y externas, fechados entre el 1 de enero de 2015 y la fecha actual”, este Instituto ha establecido que los informes finales de auditoría son aquellos que concluyen un procedimiento de naturaleza netamente administrativa – fiscalizadora y no establece responsabilidades: por lo tanto, dicho informe es entonces, un acto definitivo que si bien brinda insumos para el desarrollo de la posterior función jurisdiccional , no depende de esta².

Respecto a “*copia de los libros diarios de la contabilidad de las tiendas de los centros penitenciarios, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018; y d) copia del manual o catálogo de cuentas del sistema contable de las tiendas de los centros penitenciarios vigente para los años 2017, 2018 y 2019*” , el artículo 10 de la LAIP establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente; es decir, poner a disposición y a conocimiento de las personas sin que medie una solicitud para tal efecto. En ese sentido, el ordinal 13 contempla como información de este tipo la relativa a “los informes contables, cada seis meses, sobre la ejecución del presupuesto, precisando los ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos y resultados. Asimismo se deberán hacer constar todas las modificaciones que se realicen al presupuesto, inclusive las transferencias externas y las que por autorización legislativa se puedan transferir directamente a organismos de distintos ramos o instituciones administrativas con la finalidad de cubrir necesidades prioritarias o imprevistas”; entonces, la normativa citada es clara en establecer que la información que ha sido solicitada debió estar disponible para toda persona, no únicamente para los solicitantes.

² Resolución definitiva, referencia NUE 311-A-2016, emitida el 21 de febrero de 2017, pronunciada por el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador.



En cuanto a la información consistente en *“copia del expediente del proyecto para la creación de un fondo de actividades especiales para las tiendas de los centros penitenciarios”*, siempre dentro del artículo 10 numeral 16 se establece como información oficiosa *“el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios e incentivos fiscales, así como los beneficiarios del programa”*, por tanto, es información pública oficiosa que debería estar publicada en el portal de transparencia de la DGCP.

III. Una vez establecido lo anterior, este Instituto advierte que durante el trámite del presente recurso de apelación, el ente obligado no acreditó el motivo por el cual no puede brindar la información solicitada, puesto que en un primer momento se resolvió que la información requerida debía de solicitarse de forma directa a ASOCAMBIO, y durante el desarrollo de la audiencia oral manifestó la representación de la DGCP que la documentación relacionada con dicha asociación está en poder de la FGR debido a una investigación en curso; sin embargo, no se presentó prueba útil para probar qué información ha sido incautada por el Ministerio Público.

En razón de lo anterior es importante retomar lo establecido en el artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), bajo el epígrafe del **“derecho a probar”**, el cual expresa: *“las partes tendrán derecho a probar, en igualdad de condiciones, las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de la oposición a ésta”*. Es decir, que no solo basta con manifestar que dicha información se encuentra en poder de otra institución; sino que dichos argumentos deben ser probados; puesto que no se genera certeza a este Instituto de que en dicha institución se encuentre específicamente la información requerida por los ciudadanos.

En consecuencia, debido a que no se acreditó las razones que la representación de la DGCP mencionó durante la tramitación del presente procedimiento para no entregar la información solicitada, es dable ordenar a dicha institución que entregue la información solicitada. Lo anterior es así debido a que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública.

Asimismo, es pertinente remarcar que, la oficial de información de la DGCP no puede rechazar las peticiones relacionadas con ASOCAMBIO, con el argumento que es un

ente privado, pues más allá de su naturaleza, se relaciona con la DGCP, por lo que, de conformidad con el art. 67 pueden requerir la información de esa entidad ante la Unidad de Acceso a la Información de la DGCP, so pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, por un posible actuar negligente que limita el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3°, 58 letras b, d y g; 94, y 96 letra d de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

- a) **Tener** por recibido el escrito presentado por **Karina Vanessa Sánchez Grande**, el 11 de marzo del año 2020
- b) **Revocar** las resoluciones emitidas por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**.
- c) **Ordenar** al titular de la **DGCP** que, a través de su oficial de información, entregue a **Jaime Alberto López y Sonia Beatriz Chacón** la información concerniente a: a) *copia de los informes de auditorías realizadas en las tiendas de los centros penitenciarios, internas y externas, fechados entre el 1 de enero de 2015 y la fecha actual;* b) *copia del expediente del proyecto para la creación de un fondo de actividades especiales para las tiendas de los centros penitenciarios;* c) *copia de los libros diarios de la contabilidad de las tiendas de los centros penitenciarios, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018;* y d) *copia del manual o catálogo de cuentas del sistema contable de las tiendas de los centros penitenciarios vigente para los años 2017, 2018 y 2019; en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.*
- d) **Requerir** al titular de la **DGCP** que, en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de fenecido el plazo estipulado en la letra b) de esta parte resolutive, remita a este Instituto

el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección oficialreceptor@iaip.gob.sv

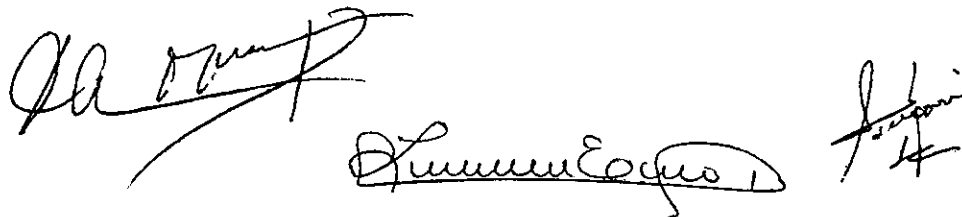
e) **Hacer saber** a las partes que contra este acto no cabe recurso en esta sede administrativa de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Entregar** copia del video de la audiencia oral celebrada el 12 de febrero del año 2020, a **Karina Vanessa Sánchez Grande**, que deberá retirar en las instalaciones de este Instituto donde se le hará la respectiva entrega.

g) **Remitir** el presente procedimiento a la **Unidad de Cumplimiento** para que verifique la ejecución de esta resolución.

h) **Publíquese** esta resolución oportunamente.


Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diez días del mes de agosto de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

